

**ÁREA DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**  
**Exp.: ECON/000016/2019**
**COMUNICACIÓN DE EXCLUSIÓN DE AULA INTERCULTURAL, S.L.**
**TÍTULO DEL CONTRATO: CURSOS DE INGLÉS EN LA MODALIDAD ON-LINE PARA LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

La Mesa de Contratación de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, ha acordado en la reunión del día 26 de agosto de 2019, convocada para la calificación de la documentación aportada por la empresa **AULA INTERCULTURAL, S.L.**, la exclusión del procedimiento de licitación de la empresa que se indica a continuación y por los motivos que se señalan.

EMPRESA	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
<b><u>AULA INTERCULTURAL, S.L.</u></b>	<p>En fecha 26 de agosto de 2019 la Mesa de Contratación de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid se reunió para proceder, a la calificación de la documentación presentada por la empresa AULA INTERCULTURAL, S.L.</p> <p>De dicha calificación resulta lo siguiente:</p> <p>La empresa <b>AULA INTERCULTURAL, S.L.</b> no ha presentado correctamente, en el plazo otorgado al efecto, toda la documentación requerida.</p> <p>La Cláusula 15 del PCAP establece que “el Órgano de Contratación, a través de los servicios correspondientes, recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VII de este pliego”.</p> <p>A este respecto se ha de indicar que el órgano de contratación a través de los servicios habilitados en fecha <b>1 de agosto</b> recabó Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de</p>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018404949830075444066**

comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 14 del RGLCAP, resultando que en la certificación emitida constaba que la empresa NO estaba al corriente de pago de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En fecha 5 de agosto se requirió a dicha empresa para que en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se recibió el requerimiento, presentara la documentación indicada en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y que no pudo ser recabada por el órgano de contratación. En concreto se le requirió, entre otras, la siguiente documentación:

*“Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 14 del RGLCAP.”*

En el plazo concedido aportó certificado positivo de fecha **21 de junio de 2019**, esto es anterior al recabado por el órgano de contratación, comprobándose su autenticidad a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Ante esta circunstancia la Mesa de Contratación realizó de nuevo consulta resultando que **la empresa NO esta en esta fecha al corriente de pago de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.**

Por tanto, el licitador **no acredita, en el momento procedimental exigido en la ley, estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, sin que pueda considerarse defecto subsanable, por lo que procede su exclusión.**

En este sentido se manifiesta el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en Resolución nº 98/2018, de 11 de abril de 2018, que concluye lo siguiente:

<Comprueba el Tribunal que en el acta de la mesa de contratación de fecha 21 de noviembre se acuerda que se debe requerir “De la empresa MAITOURS, S.L.: Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP, dado que en la consulta realizada para la Mesa de



Contratación de fecha 21 de noviembre de 2017, consta que no se encuentra al corriente de sus obligaciones.”

Por todo lo cual, el interesado conocía el motivo del requerimiento a pesar de lo cual en contestación al mismo, aportó una certificación de fecha 7 de septiembre de 2017, que si bien sirve para acreditar que la declaración responsable efectuada por la empresa es cierta y que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales en el momento de presentación de la oferta cuyo plazo finalizaba el 23 octubre 2017, no acredita que se mantenga dicha circunstancia en el momento previo a la adjudicación al constar un certificado negativo de fecha posterior (21 de noviembre de 2017).

En consecuencia, este Tribunal considera que una vez que la mesa advertía del incumplimiento a fecha 21 de noviembre, independientemente del periodo de validez del certificado, solo cabe su subsanación mediante un certificado de fecha posterior y negativo de deudas tributarias.

Por tanto, no habiéndose acreditado que todos los integrantes de la UTE estaban al corriente de pago en el momento inmediatamente anterior a la adjudicación de los lotes 6 y 8, la mesa debió excluir a la empresa requerida, por lo que se debe estimar el recurso.>

Igualmente el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en Resolución nº 124/2017, de 19 de abril de 2017, concluye lo siguiente:

<En cuanto a la posibilidad u obligación de otorgar un plazo de subsanación, el trámite del artículo 151.2, en cuanto atiende a la acreditación de los requisitos previos para contratar que fueron sustituidos por una declaración responsable, al igual que el trámite previsto para subsanar dicha documentación cuando se exige con carácter previo, admite únicamente la subsanación de un defecto formal si afecta exclusivamente a la forma de acreditación del requisito y no a su existencia misma.



Si bien es cierto que el artículo 81.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, prevé la subsanación de la documentación presentada que contuviera defectos u omisiones, en el presente caso tal y como venimos diciendo, de la documentación aportada por la recurrente no se aprecia la existencia de un defecto subsanable, sino tan solo el incumplimiento de la obligación de no tener pendientes deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

A este respecto cabe recordar la reiterada doctrina de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa del Estado y de la Comunidad de Madrid manteniendo el criterio de considerar insubsanables los defectos consistentes en la falta de requisitos exigidos y subsanables aquellos que hacen referencia a la simple falta de acreditación de los mismos pero no a su existencia (Informe 9/06, de 24 de marzo de 2006; Informe 36/04, de 7 de junio de 2004; Informe 27/04, de 7 de junio de 2004; Informe 6/00, de 11 de abril de 2000; Informe 48/02, de 28 de febrero de 2003; Informe 47/09, de 1 de febrero de 2010, de la JCCE entre otros, y Recomendación 2/2002, de 5 de junio, sobre el funcionamiento de las Mesas de contratación y en los Informes 4/2007, de 31 de mayo, 1/2008, de 4 de abril y 2/2012, de 22 de febrero de la JCCACM). En el mismo sentido las Resoluciones 8/2013, 29/2013, 116/2013 y 117/2014 de este Tribunal.

Resulta de interés especial lo señalado en el Informe 18/10, de 24 de noviembre, de la JCCE: “el criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que se reconoce como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que evidentemente es anterior al momento de subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable”.

En el supuesto que nos ocupa, no estamos ante un defecto de la forma de acreditación de un requisito, pues a la vista del certificado expedido por el Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego,



no cabe duda de que la entidad Marsegur tiene deudas con la Comunidad de Madrid en periodo ejecutivo. Por ello, este Tribunal, compartiendo lo señalado en el informe del órgano de contratación considera que se trata de un defecto insubsanable y no cabe “solicitar alegaciones complementarias” como indica la recurrente en su escrito.

La Mesa de contratación acordó la exclusión de la entidad recurrente a la vista del certificado expedido el 1 de marzo de 2017 por el Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, en el que consta expresamente “el interesado arriba referenciado sí tiene deudas con la Comunidad de Madrid en periodo ejecutivo”, sin que el órgano de contratación pueda ni deba entrar a valorar el contenido del mismo. Por ello, las alegaciones relativas a que la entidad recurrente desconocía la existencia de la deuda atribuida, o que ha interpuesto recurso de alzada o incluso, la consideración de que no se trata de una deuda en periodo ejecutivo, no pueden ser tenidas en cuenta.

Por último, tampoco puede ser tenido en cuenta el pago de la deuda el 8 de marzo de 2017, pues la situación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda autonómica ha de referirse al momento de finalización del plazo de presentación de ofertas y mantenerse hasta la adjudicación y ponerse al corriente una vez se conoce ser propuesto como adjudicatario no satisface tal requisito.

Por todo lo expuesto, se considera que la exclusión se ajusta a la legislación vigente y a los pliegos>

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Resolución nº 1119/2017, de 24 de noviembre de 2017:

<En el supuesto examinado, constituye hecho no controvertido que la mercantil recurrente en el momento anterior a la adjudicación tenía una deuda de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Oviedo, tal y como resulta del certificado emitido por la Tesorería Municipal de fecha 10 de agosto de 2017.



...De otro lado, como ha declarado este Tribunal en su Resolución 33/2010, de 23 de diciembre de 2010, citado a su vez los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 39/01 y 28/02, de 13 de noviembre de 2001 y 23 de octubre de 2002, respectivamente, “el requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social debe cumplirse desde el momento de presentar las proposiciones (...) y hasta el momento de la adjudicación, procediéndose a su acreditación a una fecha inmediata anterior a la misma”.

Expuesto lo anterior, acreditado el hecho que la mercantil recurrente no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, la consecuencia jurídica es la exclusión.

Por último y sobre la posibilidad de subsanación que apunta la mercantil recurrente, como ha declarado de forma reiterada este tribunal es subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos siempre que su contenido, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se presentan, que es anterior al momento de subsanación, es decir, es subsanable lo que existe, pero no se ha aportado, y no lo que no existe.

En el supuesto examinado, el incumplimiento existía en el momento inmediatamente anterior a producirse la adjudicación por lo que no estamos ante una falta de acreditación del requisito sino ante la falta de cumplimiento de un requisito exigido, lo que determina el defecto observado como insubsanable y la desestimación del recurso interpuesto.>

Y en Resolución nº 1053/2016, de 16 de diciembre de 2016:

<“(…) Debe tenerse presente que, como ha declarado este Tribunal en su Resolución 33/2010, de 23 de diciembre de 2010 (recurso 45/2010), citando a su vez los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 39/01 y 28/02, de 13 de noviembre de 2001 y 23 de octubre de 2002, respectivamente, «el requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las proposiciones (...), y hasta el momento de la adjudicación, procediendo su acreditación en una fecha



inmediata anterior a la misma». Por otro lado, en la Resolución 114/2011, de 27 de abril (recurso 59/2011) se ha afirmado que «el establecimiento de un plazo de validez para las certificaciones acreditativas de que una empresa está al corriente de sus pagos tributarios o relacionados con la Seguridad Social, tiene como fundamento que las circunstancias que soportan la veracidad de la certificación pueden variar con el transcurso del tiempo», en cuyo caso «el contenido de la certificación puede dejar de ser ajustado a la realidad y consiguientemente perder su condición de veracidad», razón ésta por la que resulta «correcto establecer un plazo temporal más allá del cual la certificación no extienda sus efectos». Asumido lo anterior, es también cierto que, como bien ha declarado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 1/1994, de 3 de febrero, «de la totalidad del sistema de la contratación administrativa puede extraerse la conclusión obvia de que los órganos de contratación no son los encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social, como tampoco de las tributarias, sino que su papel se limita al ejercicio de un mero control formal que se ejerce sobre la base de la documentación expedida por otros órganos, sin que la legislación de contratos del Estado pueda imponer (...) realizar calificaciones jurídicas de su contenido», en tanto dicha tarea implicaría «una complejidad excesiva de los procedimientos de contratación que, o bien no podría ser resuelta, o lo sería con graves y serias dilaciones en perjuicio del interés público». ...

... Pues bien, de la certificación obtenida de la AEAT y de los documentos aportados por la recurrente se colige que en algún momento del periodo de tiempo que media entre el término del plazo para la presentación de proposiciones, el 8 de agosto de 2016, y el momento inmediatamente anterior a proceder a la adjudicación, el 4 de octubre, la recurrente no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, siendo así, como ya dijimos que dicho cumplimiento ha de producirse desde el momento de presentar las proposiciones hasta el momento de la adjudicación, procediendo su acreditación en una fecha inmediata anterior a la misma.

Es lo cierto por tanto que en algún momento entre el 15 de septiembre de 2016 y el 4 de octubre de 2016, fechas respectivamente de las certificaciones positiva y negativa, se incumplieron por la recurrente sus



	obligaciones tributarias, y que estas estaban incumpléndose el 4 de octubre, lo que impide que pueda contratar con la Administración, <u>pues resulta acreditado al tiempo de ir a producirse la adjudicación</u> (artículo 151.2 del TRLCSP), <u>que la recurrente no estaba al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias.</u> >
--	--

**EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN**

**Fdo.: Rafael Vera Urueña**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018404949830075444066**